



el impacto que puedan provocar en el paisaje. Por tanto, tienen una repercusión en generación de puestos de trabajo muy baja, con un impacto testimonial.

-¿No ayuda entonces a terminar con el problema de la despoblación?

-En esta cuestión de la despoblación insisten mucho tanto los promotores como las administraciones públicas, que dicen que la energía eólica contribuirá al reequilibrio territorial. Bien, pues a raíz de los casos estudiados en Cataluña y en la provincia de Tarragona podemos decir que la actividad eólica no fija población, sino más bien al contrario, puesto que incluso hay una relación entre más densidad eólica y más despoblación. Los pueblos que tienen más molinos pierden más población, por tanto los proyectos eólicos no contribuyen a fijar los mínimos poblaciones por ponerse en marcha.

“ La actividad eólica no fija población, sino lo contrario; a más densidad, más despoblación ”

-¿Tiene datos concretos que demuestren esa correlación?

-Sí. La comarca de la Terra Alta, al lado del Matarraña, es la que tiene más potencia eólica instalada de toda Cataluña, en torno al 25% del total. Esa comarca es la que desde 2008, cuando se pusieron en marcha los parques, a 2018 ha perdido más población. Actualmente, tiene un 10,7% menos de habitantes que hace una década. Su pérdida de habitantes es incluso superior a comarcas del Pirineo o del Prepirineo que solían ser las que más población perdían y que están en niveles del 8-10%. Si esa actividad fuera tan buena para el territorio, la gente no se marcharía. Igualmente, podemos decir que el municipio que más densidad de aerogeneradores tiene, Caseres, es el que más habitantes ha perdido desde 2008: un 20%. De esta manera, si el municipio con más aerogeneradores y con más potencia eólica instalada de todos pierde más población que otros, se puede decir que las grandes centrales eólicas no contribuyen al equilibrio territorial.

-Los aerogeneradores que se proyectan instalar en la Comarca del Matarraña son de 6 MW de potencia y de unos 115 metros de altura. ¿Cómo pueden repercutir en el paisaje?

-Los que se proyectan para el Matarraña son más potentes que los instalados en la Terra Alta, que tienen de 2,5 MW, y más altos, el doble. En cualquier caso, habrá que ver si los acaban colocando, porque lo que se ha presentado es una previsión de futuro. La empresa promotora está previendo la puesta en marcha del proyecto eólico para un plazo de cuatro a seis años, un tiempo suficiente para que esos aerogeneradores estén en el mercado. Si fueran estos, con menos molinos, la empresa tendría la misma potencia instalada. Lo que pasa es que son más altos, así que el campo de afección visual es mucho mayor.

-¿Ha analizado los beneficios a particulares?

-No me he centrado en esa cuestión. Las empresas, aparte del IBI y del IAE a los Ayuntamientos, así como los eventuales convenios que puedan firmar, hacen también contratos con los propietarios particulares de las fincas en los que van colocados. No he estudiado esta parte, pero sé que suele ser la mitad de lo que ingresan los ayuntamientos. En mi estudio, si un ayuntamiento solía ingresar unos 5.000 euros por megavatio, un particular podía estar en torno a los 2.500 o 3.000 euros por megavatio.

-Beneficios brutos, en todo caso.

-Sí, son beneficios en bruto a los que hay que restar los impuestos correspondientes, el IVA, el cambio de tributación en la declaración de la renta debido a esos ingresos extraordinarios, etc. Sería interesante que se hiciera ese estudio para ver cuál es el beneficio real que estas centrales eólicas generan sobre la población. De hecho, normalmente los propietarios son gente mayor que se tiene que acabar buscando

“ En Francia, las empresas eólicas están obligadas a revertir el 30% de sus beneficios en los territorios ”

do un gestor que le haga las declaraciones trimestrales, así que a todo lo anterior hay que añadirle también ese gasto.

-¿Y si un propietario no está interesado en alquilar?

-Si el proyecto va hacia adelante y un propietario se niega a alquilar puede acabar expropiado y el trozo de terreno pasar a manos de la empresa.

-Entonces, ¿ante qué contexto se encuentran los ayuntamientos y particulares?

-En los últimos días no se han discutido los beneficios de la energía eólica. Nadie está en contra de las renovables y de la eólica, sino que el debate está en el modelo de energía renovable que conviene a cada territorio. Determinados modelos económicos como la actividad eólica industrial entran en contradicción con aquellos que apuestan por una agricultura y por un paisaje de calidad.

-¿Qué modelo de energía renovable eólica sería compatible con la provincia?

-Hay modelos muy interesantes como la generación distribuida a partir de diferentes aerogeneradores que pueden poner en marcha agrupaciones de ciudadanos o de ayuntamientos. Ejemplos tenemos. En el caso de Cataluña, el Ayuntamiento de La Llacuna, que, con 900 habitantes, tiene un aerogenerador que con lo que factura paga la luz de todos los edificios municipales. Eso permite a ese ayuntamiento destinar el dinero que pagaría en electricidad a otras necesidades.

-¿Y en Europa?

-En Europa hay casos muy interesantes como el de una isla de Dinamarca que en 2007 instaló 11 aerogeneradores de 1 MW, una sexta parte de los que se quieren colocar en el Matarraña. Con esas 11 torres cubren el 100% de su consumo energético anual y con lo que les sobra, con la luz que generan como excedente, hacen negocio, porque la venden al mercado. También tienen cubierta la calefacción con plantas de biomasa y disponen de placas solares térmicas. Son autosuficientes y hacen negocio con la venta de electricidad. En 2007 pusieron 10 aerogeneradores más

que están en el mar y cuya electricidad destinan a la venta a través de un cable submarino. Hacen negocio con un recurso que es del territorio. Eso no es imposible, lo ha hecho una isla de 11.000 habitantes, más o menos el mismo número de habitantes que tiene la comarca del Matarraña. Los aerogeneradores se integran en el paisaje y la gente puede pagarlos. Esa inversión cuesta unos 100 millones de euros, lo que son 12.000 euros por persona en el caso de la comarca del Matarraña.

-Un modelo más sostenibles que el español.

-Estos modelos más descentralizados son los que se tienen que enfrentar al modelo de España, un modelo basado en grandes centrales eólicas promovidas por pocas empresas y con beneficios que van a las grandes compañías en lugar de a los territorios. El modelo europeo determina qué molinos se quieren y dónde se pueden poner. Además de que los beneficios no van a empresas que no tributan en el territorio. En Alemania, por ejemplo el 50% de toda la energía eólica está en manos de la ciudadanía con modelos descentralizados y que estimulan la creación de más proyectos. Si se aplicara ese modelo, seguramente saldrían más iniciativas desde los territorios.

-¿Cree que los proyectos eólicos de grandes centrales eólicas en Teruel y más concretamente en el Matarraña o en el Maestrazgo van a prosperar?

-Cualquier tramitación, la haga el Estado (proyectos de más de 50 MW de potencia) o la comunidad autónoma (los de menos de 50 MW) ha de cumplir, en primer lugar, con todo lo que establece la normativa, incluidas las Directrices de la comarca del Matarraña en el caso de este territorio. Otra cosa es que esa normativa sea suficiente para prohibir o condicionar la colocación de estos artefactos. Lo que está claro es que si una empresa quiere poner en marcha un proyecto y la oposición no es muy grande, a veces, muchos de estos trámites se pueden pasar por alto.

-¿Y desde un punto de vista social?

-Todo el proceso de tramitación administrativa de cualquier proyecto tiene algún fallo, en la tramitación industrial, en la ambiental o en la urbanística. Pero quien puede condicionar o paralizar un proyecto es la organización política y social del territorio, que debe exponer su modelo de comarca. Si es así, las empresas dejan de tramitar. Cuando encuentran un territorio que debate, que tiene claro su modelo de desarrollo, al final lo dejan estar porque saben que en cualquier momento se les encontrará el fallo que siempre hay en cualquier proyecto. Ahora, las empresas lo que hacen es testar, hablar con alcaldes por separado y sopesar cómo respira el territorio. Y en función de como lo vean se acabarán posicionando y avanzando o no. Puede condicionar más un proyecto esa organización social y política que la mera tramitación administrativa.